

# Gobierno entrega a vietnamitas miles de hectáreas de Yaracuy que había «rescatado»

La administración de Nicolás Maduro ha estado repartiendo miles de hectáreas de terrenos productivos a privados venezolanos y extranjeros, entre ellos a un grupo de vietnamitas con el que el Ejecutivo estableció un convenio para tratar de levantar la producción nacional de alimentos agrícolas, que ha caído más de 70% desde el año 2008 según asociaciones de productores.

Como parte de una alianza económica entre Venezuela y Vietnam, el gobierno entregará 1.020 hectáreas con 3.948 metros cuadrados ubicadas en los sectores La Hoya, Macagua y La Lorena, en la parroquia de Capital Veroes, municipio Veroes, en el estado Yaracuy, de acuerdo con información del sistema del Instituto Nacional de Tierras (INTI) al que tuvo acceso TalCual. Según fuentes del sector agropecuario, se trataría del primer lote de tierras de un total de 10.000 hectáreas que el gobierno planea entregarles a inversionistas provenientes de Vietnam.

«Ya las ubicaron, ya las identificaron e inspeccionaron. Eso está listo y nadie lo va a echar para atrás», dijo a este periódico una fuente con conocimiento del asunto. «El plan del Ministerio de Agricultura es darles 10.000 hectáreas a los vietnamitas. Muchas de esas tierras fueron intervenidas, no expropiadas porque sus anteriores propietarios no fueron indemnizados. Son terrenos que estaban en actividad, productivos, que luego de que los intervinieran no produjeron absolutamente nada, como se advirtió que iba a ocurrir. Estaban abandonados y ahora el gobierno vuelve a disponer de ellos con este fin. Antes de que las intervinieran usaban las tierras para caña de azúcar y ganadería, ahora piensan sembrar arroz».

No se sabe por los momentos los términos del convenio, cuánto le costaron las tierras a los inversionistas o si Venezuela recibirá algo a cambio.



La imagen señala que la capacidad de uso de los suelos que serán entregados oscila entre las clases I y IV, es decir, que hay tierras que son cultivables sin limitaciones de uso y donde los rendimientos que se obtienen son altos y otros terrenos que requieren de un manejo muy cuidadoso porque presentan severas

limitaciones de uso.

A partir de 2005 el chavismo expropió millones de hectáreas productivas en todo el país para supuestamente «asegurar la seguridad agroalimentaria», pero en ningún momento estas intervenciones se tradujeron en una mejoría en la producción nacional de alimentos. Luego de ser intervenidas durante la «guerra contra el latifundio» de Hugo Chávez, valiéndose de la *Ley de Tierras y Desarrollo Agrario* aprobada en 2001, las tierras fueron desvalijadas y abandonadas. Ahora el gobierno de Maduro, en su línea de reprivatizar lo que el mismo chavismo llevó a la quiebra, vuelve a disponer de algunas tierras pero para deshacerse de ellas, como ha venido haciendo con empresas estatales que fueron expropiadas.

De hecho, justo en el municipio Veroes, en Yaracuy, el INTI aplicó en agosto de 2012 una «medida de rescate y aseguramiento de tierras» sobre la Finca La Palma, con una extensión de 1.500 hectáreas, presuntamente porque estaba ociosa o inculta. Pertenece a Antonio Ruíz Zapata, a quien el Estado le expropió dos fincas en Apure: Hato La Gloria y Hato La Pradera.

El convenio entre Venezuela y Vietnam se viene cocinando desde hace varias semanas. El 24 de febrero el gobernador de Yaracuy, el militar Julio César León Heredia, informó en un video publicado en su cuenta de Instagram que sostuvo una reunión con el embajador de Vietnam en Venezuela, Le Viet Duyen, en la entidad para «impulsar convenios» y «fortalecer el ámbito productivo, comenzando desde lo que es la capacitación y también determinar capacidades y potenciales para fortalecer proyectos agrícolas y pecuarios».

En este sentido, el diplomático vietnamita declaró que se siente «muy contento» de visitar Yaracuy y seguro de que próximamente van a «materializar los proyectos» entre «ambas partes» para «lograr objetivos de desarrollo de la agricultura». «Mis deseos de éxito para el estado Yaracuy con un nuevo modelo de desarrollo económico por la prosperidad del pueblo y del desarrollo del estado. Trabajamos juntos y seguro que venceremos», dijo a través de una traductora.



En diciembre de 2020, Duyen dijo, durante una entrevista por VTV, que «a pesar de la pandemia el gobierno vietnamita y el gobierno venezolano lograron en 2020 muchos resultados positivos en las relaciones bilaterales». «En materia política realizamos con éxito la sesión de consulta política Venezuela–Vietnam, con

la finalidad de sentar las bases para implementar distintos proyectos», dijo, al tiempo que aseguró que el país asiático «seguirá garantizando la seguridad alimentaria en la patria de Bolívar».

De acuerdo con una fuente del sector de alimentos, el gobierno ha estado entregando tierras que tenía el INTI, que eran privadas y otras de productores que tenían invasiones parciales a dos grupos: por un lado a económicos extranjeros y por el otro a «enchufados».

«El Grupo Ebenezer se ha comprado medio Yaracuy, muy cerca de las tierras que les dieron a los vietnamitas. Ebenezer está llegando y ya tiene casi 5.000 hectáreas de tierra tipo uno y dos. A ellos ningún grupo les roba un tornillo, llegan al extremo de tener un comando de las FAES dentro de la finca. Pero los productores tradicionales siguen padeciendo la misma inseguridad jurídica de siempre».

## **¿Y los inversionistas de aquí?**

Una fuente del sector agropecuario, que solicitó el anonimato, señala que los productores no están en contra de la inversión extranjera y le dan la bienvenida a quien venga a producir en el país; sin embargo, sostienen que antes de invitar a inversionistas extranjeros y darles concesiones el gobierno debería primero hacerle la propuesta a productores locales tradicionales para ver si están interesados y capacitados para asumir el reto de invertir en tierras abandonadas y reactivarlas.

*«Bienvenido el inversionista extranjero o la empresa extranjera, pero no se puede privilegiar el capital extranjero sobre el nacional. Si se va a dar este proceso (de entrega de tierras), como en efecto se está dando, debería haber conversaciones previas con actores productivos nacionales».*

Indica que el gobierno también debería darles a los productores nacionales las mismas condiciones que prevé que les garantizará a los inversionistas vietnamitas para que puedan producir sin enfrentar los problemas que por años ha denunciado el sector privado nacional, entre ellos la inseguridad en el campo.

«Al productor nacional lo roban todos los días, el hampa lo tiene loco. Tienen que darnos las mismas condiciones que les ofrecen a los extranjeros. Nos están volviendo leña con invasiones y con inseguridad e incertidumbre jurídica y personal

que hay en el campo venezolano. Para nosotros cada día es más inviable, estamos para atrás. Hay bandas que se dedican a la extorsión, secuestro, abigeato y robo y hurto de vehículos, problemas que estoy seguro de que no tendrán los vietnamitas. La experiencia dice que cuando el gobierno tiene voluntad política para hacer algo lo hace, en este caso tiene voluntad para generar las condiciones necesarias a los inversionistas extranjeros», agrega la fuente.

Además de la inseguridad rural, el sector agropecuario nacional se ha visto afectado en los últimos años por otros factores como la intervención de la propiedad agraria a través de confiscaciones, ocupaciones y expropiaciones, control de precios, crecimiento de las importaciones agroalimentarias sin pago de aranceles y a un dólar preferencial que compiten de manera desleal con lo cultivado en Venezuela, los limitados recursos de la banca para otorgar créditos, el rezago tecnológico, la obsolescencia de máquinas y equipos y la severa escasez de semillas, fertilizantes, agroquímicos, repuestos, lubricantes, gasolina, cauchos y privatizaciones.

Esta situación ha hecho que la producción agrícola nacional haya caído más de 70% desde 2008.

El 82% de las 5.173.000 toneladas métricas de alimentos que se consumieron en 2020 fueron producto de importaciones tanto de materia prima para la agroindustria como de productos terminados. El campo venezolano aporta apenas el 18% de lo que se come en el país, de acuerdo con un estudio realizado por la Organización No Gubernamental Ciudadanía en Acción.

«Si la producción agrícola nacional desaparece casi que no pasa nada, eso es triste, no hay soberanía alimentaria. Estamos muy lejos de ella. Y la Constitución habla de seguridad y de soberanía alimentaria. No tenemos seguridad alimentaria, pero menos tenemos soberanía», dijo, el 3 de febrero, el sociólogo y especialista en desarrollo y seguridad alimentaria Edison Arciniega, director ejecutivo de Ciudadanía en Acción.

Con información de TalCual